

UN PROYECTO TRASCENDENTE

Rubén M. Lo Vuolo¹

Los cambios en el ambiente macro-económico siguen siendo los más efectivos y “anónimos” para alterar profundamente los modos de organización social del país. Argentina enseña que frente a crisis de integración social (hiperinflación) se puede debilitar la identidad laboral, y con ello la identidad colectiva, en escenarios poco conflictivos e, incluso, en un ambiente de amplia satisfacción.

El control de la inflación generó la ilusión de un ambiente virtuoso de crecimiento, empleo y bienestar social donde la mayoría estaría incluida. En cierto modo, la "politización" del problema de la inflación tiene como contracara la "despolitización" del problema del desempleo y de la exclusión social. Paradoja: la “estabilidad” de precios se vuelve el único interés generalizable al conjunto de la sociedad, mientras esta misma sociedad se divide, dispersa y fragmenta en intereses cada vez más particulares.

Algunos estudiosos observaron un escenario parecido en la experiencia del Reino Unido de Margaret Thatcher y difundieron la idea de la "sociedad de dos tercios", para describir un escenario donde la retracción de las instituciones públicas conforma un entramado social donde dos tercios quedan “adentro” y un tercio queda “afuera”. Electoralmente, esta sociedad es rentable: con dos tercios de satisfechos las elecciones las gana el oficialismo y sólo queda frenar el conflicto social extremo mediante una mezcla de programas asistenciales “focalizados” y represión.

Algo similar sucedió en el país. Mientras una mayoría de satisfechos (por acción u omisión) imaginaba su curva de consumo creciendo ininterrumpidamente, el conflicto social se mantenía confinado en la zona de “exclusión” extrema, con programas asistenciales esporádicos, seguro de desempleo de baja cobertura y programas de empleo subsidiado; o sea, programas baratos, con requisitos de acceso difíciles de cumplir y límites temporales.

¹ Economista, investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) y docente universitario.

Estas políticas dan la apariencia de funcionar cuando el riesgo social está concentrado en un grupo y el empleo se visualiza como un mérito individual que selecciona entre los más capaces. Los dos tercios incluidos entienden merecerlo y que no les atañen ni son su probable destino los “perdedores” del modelo. La estrategia económica apuesta que la mayor competencia en los niveles de muy baja calificación logrará bajar los salarios pero sin gran conflicto social. En todo caso, el conflicto se distribuye al interior de la propia clase trabajadora mientras el capital decide sus movimientos sin límites.

Este escenario se enfrenta no sólo a problemas sociales sino también a dos problemas "económicos". Primero, en la medida que se amplía el tercio marginado, el costo de las políticas sociales "focalizadas" crece y su efectividad disminuye. Segundo, si la baja de los costos laborales se da sólo en la amplia base de trabajo no calificado, no alcanza para que la economía sea "competitiva" ni para que se produzca el ajuste "masivo" de los mercados. Tercero, la expulsión de fuerza de trabajo y el ajuste del costo laboral van minando el capital acumulado en la fuerza de trabajo calificada.

En este trayecto, los cuasi-fijos costos laborales del sector formal satisfecho se transforman en costos variables, creando una suerte de "asalariado interino" que entra y sale del empleo según los vaivenes del ciclo económico. Casi todos los trabajadores pierden estabilidad y se dilata la población afectada por el "riesgo" de desempleo, de forma tal que algunos pueden diluir en parte el riesgo individual al desempleo, pero todos pierden "calidad" en las condiciones de empleo (por ejemplo, se emplean trabajadores de mayor calificación de la necesaria). Este escenario dibuja la segunda etapa de la Convertibilidad.

En este escenario el entramado social aumenta su "porosidad" y se conforma un dibujo social con una minúscula cúspide y otra paupérrima base no tan amplia de “muertos de hambre”. Pero la mayor parte de la sociedad queda en una zona de “vulnerabilidad” donde es cada vez más volátil la entrada y salida. Si bien el flujo puede ser en ambas direcciones, la ineficacia y desigualdad del modelo económico hace cada vez más difícil el escape hacia arriba. Los satisfechos se enfrentan ahora con una libertad privada para elegir pero que no tiene correlato con su capacidad de compra y con el cada vez más inestable empleo. De a poco, terminan encontrándose en el derruido espacio público con los excluidos cuyo destino les parecía ajeno.

Un cambio drástico de las reglas de juego macroeconómica en este contexto provoca una brutal alteración de la situación de los vulnerables. Esta es la Argentina de la apropiación de

ahorros financieros, la maxi-devaluación, la transferencia de patrimonios por licuación de pasivos y “pesificación” asimétrica. Otra vez la fantasía (o hipocresía) que discurrea que un mero cambio en el sistema de precios (ahora la devaluación) generará un círculo virtuoso de producción, empleo y bienestar. Por el contrario, esta devaluación solo sirvió para generar mayores transferencias patrimoniales y mayor fragmentación social. O sea, agravar el desgarramiento del tejido productivo y social cuyo correlato es la escalada de la pobreza por ingresos, el ruido a cacerolas, las asambleas barriales, la pérdida de legitimidad de las jerarquías políticas. O sea, profundizar esta segunda crisis de integración social en una década sólo comparable en la historia contemporánea con la República de Weimar de la Alemania pre-nazi.

De esto no se sale con un “proyecto productivo” que cambie las fuentes de captación de renta de sectores arbitrariamente privilegiados, como es la actual apuesta de una maxi-devaluación que sólo parece justificarse en la decisión política de licuar pasivos y entablar alianzas en la cúspide de un cuerpo social cada vez más depredado. Este resultado no se cambia con impuestos extraordinarios decorativos o programas asistenciales que por definición son escasos e ineficaces.

Esto se cambia con un proyecto trascendente que se asiente sobre los intereses comunes entre la amplia zona de vulnerabilidad social y los “estructuralmente” excluidos. Esta es la única forma de recuperar legitimidad para el orden político social y económico. La profundidad de la crisis no admite soluciones mágicas inmediatas sino persistencia en un camino diferente. Hay que desconfiar de las virtudes mecánicas de los grandes títulos generales e indiscriminados (devaluación, pesificación, dolarización) liderados por el saber convencional.

Un proyecto de trascendente de integración social requiere de nuevos actores capaces de construir un nuevo pacto generacional que le dé otro sentido temporal al esfuerzo presente. Ese pacto debería asentarse sobre cuatro pilares básicos e ineludibles: i) privilegio de la infancia y la ancianidad (ingreso ciudadano y reforma previsional); ii) reforma tributaria socialmente auditada, modificando el impuesto a las ganancias e incorporando tributos especiales a la herencia, a la destrucción del ambiente y a los patrimonios acumulados desmesuradamente; iii) escuelas y hospitales absorbiendo mano de obra calificada con ingresos y retención masivas; iv) disminuir el peso de la deuda pública y no socializar el de la deuda privada (revisando, incluso, las medidas tomadas hasta aquí).

Si el presente económico no privilegia estas opciones básicas de inicio, no puede esperarse un futuro mejor. Y no es pedir mucho querer estar mejor que ahora.